

Institucional. Sin embargo estos incidentes no lo "disciplinaron" y todavía al escribir su "Octavo Piso" decía: Martínez Domínguez "gobernó con mano dura y centralismo absoluto en las decisiones" y otros juicios igualmente objetivos.

Estas elecciones federales coincidieron con las constitucionales de ese año en Nuevo León, en las cuales el Partido Revolucionario Institucional nominó como su candidato a D. Alfonso Martínez Domínguez, quien había sido mantenido en el ostracismo político durante el sexenio anterior, por el Lic. Luis Echeverría Álvarez, pero que ahora era llamado por el Lic. José López Portillo porque "Zorrilla se fue y apareció Martínez Domínguez, nos dice el Dr. Luis E. Todd Pérez (41), los empresarios agrega intervinieron en esta decisión, ya que querían un hombre de las características administrativas y de ejercicio del poder que Martínez Domínguez representa".

En efecto, su propósito declarado era acabar con el supuesto caos de la administración Zorrillista, liquidando la existencia o sometiendo al orden a cotos de poder como los representados por las organizaciones patronales levantiscas (CONCANACO principalmente), o enclaves de la izquierda como el representado por el Frente Popular "Tierra y Libertad" y algunos movimientos sindicales disidentes. Esta derechización del régimen político tuvo su reflejo inmediato en la Universidad de Nuevo León, en donde la "Bata Blanca" hegemónica en las posiciones de poder, y enfrentando una izquierda sumamente dividida y debilitada, consideró llegado el momento de romper su alianza coyuntural con la misma haciendo aprobar en mayo de 1979 una resolución en el Consejo Universitario condenando una supuesta intervención del Partido Comunista en los asuntos de la Máxima Casa de Estudios del Estado.

A mayor abundamiento, la participación de éste partido en el proceso electoral de ese año fué puramente simbólica, pues su candidato a gobernador y a diputados locales carecían de registro electoral, amén de que ciertos movimientos de izquierda se mantuvieron ajenos a estos eventos, alegando su oposición a las vías electorales como métodos de lucha políticas. De todas formas se manipularon ciertas cifras para hacer posible la llegada a la Legislatura de un diputado en nombre del Partido

Popular Socialista. Pese a sus limitaciones, la reforma política en Nuevo León abrió un nuevo espacio para muchas activistas políticos de la izquierda universitaria, lo que a la postre contribuyó a debilitar a ésta cada vez más en el seno de la UANL.

Martínez Domínguez inició su mandato dando pruebas de inmediato que sus amenazas de realizar un gobierno "duro" eran en serio: aprovechando un incidente menor de tránsito en las inmediaciones de la Colonia "Tierra y Libertad" hizo intervenir sin la menor necesidad, a un destacamento del Ejército para controlarlo y un poco después, auspició un fallo negativo, a los trabajadores de CRISA que mantenían un paro laboral en demanda de la democratización de su sindicato, haciendo caso omiso de las manifestaciones masivas en favor del mismo, etc. En la Universidad, hizo a un lado al candidato que postulaba la "Bata Blanca" para la Rectoría, el Dr. Roberto Moreira, porque éste se negó a aceptar un secretario general impuesto por la gubernatura, así como ciertos planes para incrementar las cuotas y "limpiar" a la Institución de personajes de la izquierda.

En su "Octavo Piso" cuenta el Dr. Todd cómo Martínez Domínguez los hizo renunciar a la candidatura ya en marcha del Dr. Moreira, para imponer en su lugar al Dr. Alfredo Piñeyro López, también integrante de éste grupo, pero ferviente admirador de la cultura prusiana, declarado fascista convencido y por tanto, muy afín a la política proyectada por Martínez Domínguez, quién deseaba tomar cumplida venganza de quienes lo habían llevado al ostracismo, en las condiciones que ya tuvimos ocasión de relatar.

Una vez resueltos los problemas internos del Grupo la "Bata Blanca" y sus fervientes seguidores, se proclamó oficialmente la candidatura a la rectoría del Dr. Alfredo Piñeyro López, quién en su primer acto masivo de partidarios se comprometió a cumplir tres puntos centrales de su programa, a saber: elevar el nivel académico de la Universidad; resolver su problema financiero sobre la base de promover la fundación de negocios tales como los puestos en marcha en la Facultad de Medicina, para incrementar los ingresos propios; y finalmente, liquidar la presencia de comunistas o izquierdistas frontalistas, afirmando que "... con ésta gente

no transaré". El resultado final fué que la unidad tantas veces demostrada por los integrantes de la "Bata Blanca" empezó a resquebrajarse y andando el tiempo, el Grupo desapareció por completo. El Dr. Todd Pérez caracterizó en lo general al rectorado del Dr. Piñeyro como: "... una paz productiva y una "politización" demasiado uniforme y disciplinada". (42)

La izquierda frontalista, en sus dos destacamentos: los restos del grupo "Angel Martínez Villarreal" y los fieles al Comité Estatal del PCM, continuaron profundizando sus discrepancias y ni siquiera intentaron dialogar entre ellos para una actitud común frente al problema de la designación del nuevo rector. Finalmente, cada grupo intentó registrar ante la Junta de Gobierno a su respectivo candidato, pero ni siquiera lograron reunir los requisitos exigidos para ello. En consecuencia, no hubo candidato de la izquierda que pudiera presentarse como una alternativa distinta a la ofrecida por el Gobierno del Estado en la persona del Dr. Piñeyro.

Sin embargo, al mismo tiempo que estos eventos tenían lugar en la UANL, el auge esplendoroso que rodeó a los primeros años de la "Alianza para la Producción" no pudo resolver las contradicciones estructurales en el modelo económico-social del país, y antes bien, esas distorsiones se profundizaron todavía en mayor grado de tal manera que para mediados de 1981 se presenta claramente una más grave etapa de la crisis estructural. La recesión internacional, la baja acelerada de los precios del petróleo, el deterioro de las finanzas públicas, el aumento de la deuda externa, la espiral inflacionaria, y otros factores similares, crearon un clima de gran tensión que finalmente desembocó en una nueva y más escandalosa devaluación a principios de 1982. Todas las medidas correctivas aplicadas por el Gobierno Federal fracasaron estrepitosamente de tal manera que el primero de septiembre, al presentar López Portillo el último informe de gobierno, anuncia sorpresivamente la nacionalización de la banca privada y el establecimiento de un estricto control de cambios, tratando de salvar el interés general del capitalismo mexicano, haciendo nacer una importante fisura con el capital financiero privado y parte del propio aparato estatal.

En el caso de Nuevo León, la primera señal pública de que las cosas no iban nada bien las dió a conocer el orgulloso Grupo Alfa, al

despedir buena parte de sus altos ejecutivos, a mediados de 1981, creando la llamada "Crisis de los Ejecutivos". En poco tiempo, una cifra calculada conservadoramente en más de 2,500 altos empleados y ejecutivos de diverso nivel, fueron despedidos de las empresas regiomontanas. A fines de ese año —1981— estalló claramente la crisis económica cuándo se anunció, en medio de un escándalo nacional, que el Banco Estatal de Obras y Servicios Públicos —BANOBRA—, concedía en términos demasiado generosos un préstamo de \$ 24,000 millones de pesos, para salvar al Grupo Alfa de sus principales dificultades económicas.

El crecimiento económico que había alcanzado los 45 puntos en 1980, cayó a sólo seis puntos en 1981, a menos once puntos en 1982 y a la cifra sin precedentes de menos 37 puntos en 1983. Para mediados de éste año, la Cámara de la Industria de la Transformación de Monterrey informaba que estaba ociosa el 60% de la capacidad instalada de la industria metal-mecánica; el 65% la de partes automotrices; el 40% la del vidrio y cristal; el 30% el rubro de celulosa y papel, y el 20% en petroquímica, alimentos y básicos. El personal ocupado por los socios de la CAINTRA se había reducido en un 22% y entre 1980 y 1983 los Grupos Alfa, Visa, Vitro, Cydsa, Cemex, Lamosa e Imsa, habían perdido en conjunto 41,000 empleos, al pasar de 151,000 a sólo 110,000 entre todos ellos. La recesión alcanzaba, por tanto, niveles altamente dramáticos.

Estos graves hechos económicos se daban en medio de una compleja situación política en dónde los planes federales de introducir cambios en los procesos electorales, encontraban una fuerte resistencia en estados como el de Nuevo León, en dónde se pretendía destruir a la izquierda como posible alternativa a la Ofrecida por el Partido Oficial y el Partido de Acción Nacional. En este sentido el Gobierno de Zorrilla Martínez, con el beneplácito del sector gran empresarial, ya había marginado casi por completo a la izquierda cuyo protagonismo había sido muy intenso en los primeros años de la década de los setentas.

El movimiento guerrillero urbano cuyo punto más alto lo había sido el inútil asesinato del industrial D. Eugenio Garza Sada el 17 de

septiembre de 1973, había sido liquidado por completo gracias al arresto, la desaparición física e incluso el asesinato de sus principales integrantes. En el terreno sindical, el brote radical que había nacido en la Sección 19 del Sindicato Ferrocarrilero fué destrozado violentamente en marzo de 1972, con saldo de varios trabajadores muertos, heridos o detenidos. En cambio, grupos que aceptaron una negociación con el Gobierno y sus agentes como el existente entre los trabajadores minero-metalúrgicos de las Secciones 67 y 68, habían venido a menos, de tal manera que no pudo desarrollarse una corriente capaz de disputar el control del movimiento sindical a los líderes oficialistas.

Los grupos existentes en el movimiento precarista de la ciudad, superando una división surgida en sus filas, lograban sobrevivir en mejores condiciones que los anteriormente citados. En la Universidad, la izquierda que aspiraba a recuperar los espacios perdidos en los años previos, prácticamente fué desmantelada desde fines de 1979, al expulsarse con pretextos diversos a maestros activistas de varias escuelas y facultades. A menos de un año del rectorado del Dr. Piñeyro se montó una artificial crisis en la dirección del Sindicato de Trabajadores, gracias a la cual el núcleo que lo venía dirigiendo fué desplazado y en su lugar se entronizó una tendencia de la izquierda sumamente moderada que aceptó en su afán de sobrevivir, las nuevas reglas de juego impuestas desde el Gobierno del Estado y la Rectoría.

En esos días el Partido Comunista Mexicano realizó lo que tal vez fué su último esfuerzo por reconquistar los espacios ya perdidos en la Universidad, al celebrar una Conferencia dedicada al tema, en la cual se acordaba "colocar en el centro de la actividad de los comunistas en la UANL la lucha por conquistar la plena autonomía y la democracia". Apoyándose en un diagnóstico más o menos exacto del momento que vivía el movimiento de masas de la Universidad, afirmaba que: "Abatido por la crisis de la izquierda y objeto de la manipulación y la corrupción del reformismo oficial de los últimos dos sexenios, el movimiento de masas en la UANL se caracteriza hoy por una gran confusión ideológica; el predominio de direcciones identificadas con las posiciones de la derecha; la existencia incipiente de un movimiento estudiantil democrático, reducido a unos cuantos grupos de activistas, que encuentra

graves dificultades para dar continuidad a sus acciones y para conformar una plataforma política que pudiera permitirle la unidad y la fuerza necesaria para desplegarlas hacia la masa estudiantil; la existencia de un cuerpo magisterial disperso, sin organizaciones académicas propias, sobreexplotado y expuesto en su trabajo a los vaivenes de los grupos políticos antidemocráticos que actúan en la UANL".

Al referirse al "charrazo" sufrido en el STUANL se reconocía que "En la derrota sufrida... los comunistas tenemos una gran responsabilidad, pues tanto los órganos de dirección del Partido en el Estado, como quienes estaban al frente del comité ejecutivo del STUANL, como toda la militancia, no fuimos capaces de impulsar una respuesta masiva al charrazo"; terminando por proponer: "... a todas las corrientes democráticas y de izquierda en la UANL, la más amplia unidad para impulsar el movimiento de masas en la lucha por la democratización de este centro de enseñanza superior"(43) El documento terminaba dando cuenta de que por su "abierta colaboración con la derecha" expulsaba del PCM a otros 13 militantes, casi todos ubicados en la Escuela Preparatoria No. 9, en dónde influían la Dirección de ese plantel. En los mismos meses se expulsó de la UANL al grupo que dirigía a la Esc. Preparatoria No. 3, acusada penalmente de manipular los ingresos propios en beneficio del Partido Comunista de Nuevo León. Naturalmente, tal y como solía hacerlo en éste tipo de casos, el Comité Estatal del PCM expulsó a los pocos días de sus ya muy mermadas filas a los involucrados en este hecho represivo, supuestamente defendiendo "el honor del Partido".

En los meses siguientes se siguieron dando otros casos de expulsiones de la Universidad, algunos a título individual, pero en enero de 1982 ésta "limpia de comunistas", demandada por el grupo gran empresarial desde los primeros años del rectorado del Dr. E. Todd Pérez, tuvo su punto culminante con la represión de un destacado y numeroso grupo de maestros de alta calificación académica de la Facultad de Ciencias Químicas —unos pocos de ellos involucrados en el movimiento guerrillero local—, que acabó por convertirse en un problema de resonancias nacionales gracias a la solidaridad brindada por el Sindicato de Trabajadores de la UNAM, lo que revirtió en contra de la Rectoría el supuesto carácter justificado de la medida, terminando por llegarse a un

acuerdo parcial pues se tuvo que aceptar finalmente el retiro de la mayor parte de los acusados, previa indemnización legal.

Debemos hacer notar que hasta ese momento, la prensa y demás medios de expresión masivos locales venían apoyando al Rector y al Gobernador en ésta “cacería de brujas”, pero a partir del caso de Ciencias Químicas, su verdadero carácter fascistoide quedó a la vista y eso dificultó en grado muy importante el continuar semejante tarea, que por otro lado, estaba ya básicamente cumplida. En la mayor parte de los casos —vale la pena insistir en ello— la solidaridad brilló por su ausencia y aún las organizaciones dirigidas por la izquierda se mantuvieron indiferentes, sin hacer nada práctico en defensa de los afectados. Incluso los dirigentes formales del Partido Comunista hicieron “leña del árbol caído” en la mayor parte de los casos, contribuyendo a dismantelar una estructura que había costado años levantar.

Además, el problema fué muy influido porque en esos meses —para ser exactos: en noviembre de 1981— el Partido Comunista como ya tuvimos ocasión de señalar, acordó autodisolverse y uniéndose a otros grupos, algunos con una larga trayectoria en contra del Partido Comunista tradicional, dió nacimiento al Partido Socialista Unificado de México, concentrándose cada vez más en las puras tareas electorales, haciendo a un lado su trabajo de masas de siempre. Desde entonces, ni el PSUM ni sus inmediatos sucesores: Partido Mexicano Socialista y el actual Partido de la Revolución Democrática, intentaron reunir a sus militantes para dar un juicio sobre los asuntos universitarios, dado que los pocos activistas sobrevivientes de la represión Martínez Domínguez — Piñeyro López, dedicaban toda su atención a los asuntos políticos-electorales, mientras que otros pocos se retiraron a la vida privada, se refugiaron en las tareas académicas y casi todos a intentar borrar de su pasado el paso por las organizaciones de la izquierda. Esto contribuyó, sin duda alguna, a la disolución de la izquierda como movimiento de masas en la Universidad, aunque se conservaron bastante desdibujados algunos pequeños núcleos en escuelas y facultades. Sin embargo, no parece existir alguien interesado en reagruparlos, darles nuevos planteamientos programáticos y encabezarlos en la etapa que hoy cursa la Universidad.

A mayor abundamiento, al introducirse reformas al Art. 123 Constitucional y a la Ley Federal del Trabajo, para incluir las normas que deberían regir al sindicalismo universitario, en pleno auge en el país, se consolidó ese estado de cosas perdiendo el Sindicato de Trabajadores de la UANL su anterior carácter como fuerza independiente de la rectoría en turno. Para entonces brilló en toda su intensidad lo que el propio Rector Piñeyro calificó alguna vez: como un “sano feudalismo en la Universidad”, entendiendo por ello que en cada escuela el director podía hacer lo que le viniera en gana con su personal, contando de antemano con el apoyo de la Rectoría, a cambio de que aquel apoyara a éste en sus planes autoritarios y facciosos.

En ese ambiente de exitoso dismantelamiento y sumisión de la izquierda, la Rectoría pudo llevar adelante con muy simbólicas resistencias, sus planes para construir una auténtica camisa de fuerza apoyándose en disposiciones incorporadas al Reglamento o Estatuto General de la Universidad. También pudo plantear primero al Grupo de los Directores y luego al Consejo Universitario, un plan para el aumento sistemático de las cuotas internas, indexándolas a los incrementos en los salarios mínimos, lo cuál se aprobó por una abrumadora mayoría, tal y como le era útil políticamente al Gobernador del Estado Martínez Domínguez, que desde su llegada como candidato oficial había propuesto en sus prácticas privadas con los directivos universitarios, el atreverse a dar ese paso. La UANL se convirtió, por tanto, en una de las pocas instituciones públicas que pudo resolver sin resistencia significativa, un problema tal vital como el pago de las cuotas internas.

No se consiguieron iguales o parecidos resultados en lo que toca al contenido ideológico de la educación preparatoria, pues una reforma instrumentada en 1983, mantuvo en las áreas de las ciencias sociales casi sin cambios los puntos de vista adoptados en la Reforma de 1973. Para desesperación de algunos extremistas de la derecha, la concepción marxista en las ciencias sociales había forjado tales raíces, que su rechazo autoritario se convirtió en algo inconveniente.

Mientras tanto, a nivel nacional y local el proceso de reacomodo de las fuerzas políticas, abierto tras las modificaciones introducidas en

la legislación electoral por el Gobierno del Lic. López Portillo seguía su curso y en 1981, tal y como ya hemos tenido ocasión de señalar, se fusionaron en el llamado Partido Socialista Unificado de México una serie de grupos y partidos, entre ellos el tradicional Partido Comunista Mexicano, el Partido del Pueblo Mexicano, el Partido Socialista Revolucionario, el Movimiento por la Acción y la Unidad Socialista, el Movimiento de Acción Popular y otros, desapareciendo así, con una anticipación de ocho años a lo que luego ocurrió a nivel mundial, el movimiento comunista mexicano, presente como fuerza testimonial desde el lejano año de 1919, pero que jamás arraigó masivamente a lo largo y ancho del país.

Ya tuvimos ocasión de señalar también que en lo que toca a Nuevo León, los objetivos de la Reforma Política fueron desde un principio sumamente manipulados, particularmente durante el sexenio de Martínez Domínguez, de tal manera que sí bien a nivel nacional la misma permitió una limitada apertura del sistema electoral hacia la izquierda, aquí no ocurrió así favoreciéndose en todo caso principalmente al principal partido de la derecha, el Partido Acción Nacional. Este hecho se puede visualizar objetivamente si vemos las votaciones oficiales reconocidas a los partidos de uno y otro signo. En el caso del PAN, los datos son los siguientes:

Elecciones de:	Votos para gobernador:
1979	122,789
1985	183,374
1991	293,854
1997	656,993

Para los partidos de izquierda o de centro-izquierda, las votaciones reconocidas fueron las siguientes:

Elecciones de:	Partido Político	Total:
1979	Popular Socialista	2,793
	No registrado	850
1985	Socialista de los Trabajadores:	39,088
	Popular Socialista	26,211
	Revolucionario de los Trabajadores:	6,641
	Soc. Unificado de México:	3,447

1991	Popular Socialista	2,149
	Revolución Democrática	25,504
1997	Cardenista de Reconstrucción Nacional:	1,978
	del Trabajo:	79,146
	Rev. Democrática:	42,691
	Part. Cardenista	2,610
	Popular Socialista	1,866

Como puede verse, el gran total de estos partidos es para 1979 de apenas 3,643 votos; aumenta a 75,387 seis años después; a 29,631 en 1991 y finalmente, en 1997 llegaron a 126,313 sufragios. En el camino, perdieron su registro electoral el Partido Cardenista de Reconstrucción Nacional, el Partido Popular Socialista así como otros partidos tales como el Liberal Revolucionario, el Demócrata Mexicano y el Auténtico de la Revolución Mexicana.

En el curso de estos años, el Partido Comunista nunca fue reconocido como tal, y solo hasta que participó como Socialista Unificado de México se le reconoció un triunfo en el municipio de Bustamante, N.L., en 1985 y seis años después, como Partido de la Revolución Democrática, se le dió una posición puramente simbólica en el Congreso del Estado. El Partido del Trabajo aunque participó en las elecciones federales de 1988, a nivel estatal sólo se le registró hasta 1994.

A pesar de sus éxitos en la obra material gracias a los recursos petroleros al inicio de su mandato, así como políticos al dismantelar la izquierda existente en el movimiento sindical, universitario, popular, etc., al Gobernador Martínez Domínguez no le fue muy bien al terminar su sexenio, pues no pudo imponer, a pesar de todos sus esfuerzos, a un sucesor de su mismo grupo político. En su lugar tuvo que aceptar a regañadientes la candidatura del Lic. Jorge Treviño Martínez, quién se desempeñaba como Diputado Federal y encabezaba la importante Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, amén de ser amigo muy cercano del entonces Presidente de la República, Lic. Miguel de la Madrid Hurtado. El resultado principal de este negativo resultado fué que el grupo aparentemente sólido de Martínez Domínguez se fracturó y mantiene su división profunda hasta el día de hoy.

En la Universidad Autónoma de Nuevo León, ya sin la presencia de la izquierda como fuerza con fisonomía propia, la hegemonía priísta fué total, pero el principal constructor de ese panorama, el Dr. Alfredo Piñeyro López, no pudo escalar a niveles superiores en la estructura del poder gubernamental, teniendo que contentarse con regresar a la Facultad de Medicina, en dónde se hizo elegir Director de nueva cuenta y como tal, quiso consolidar su proyecto de convertir al Hospital Universitario en una institución de carácter privado, pues era y es "propiedad" de la UANL y no del Gobierno del Estado como en sus primeros tiempos. Por tanto, se le liberaba de su papel estelar que jugaba en la asistencia social que brindaba a los estratos más pobres de la población la Administración Pública nuevoleonense, la cual pasó a ser dada con grandes y crecientes limitaciones en el entonces recién fundado Hospital Metropolitano.

El resultado práctico de estas medidas tomadas durante los últimos años del sexenio de Martínez Domínguez, fué que los servicios del Hospital Universitario se encarecieron sobremanera y una serie de instrumentos creados para allegarle recursos por otras vías, como el funcionamiento de un Patronato cuya actividad principal era la organización periódica de sorteos, así como la fundación de varios negocios comerciales e industriales, terminaron en un completo fracaso, en medio de un escándalo público montado por los medios masivos de comunicación en relación con sus dudosos resultados materiales.

Finalmente, en 1996, después de la renuncia del Lic. Manuel Silos Martínez a la Rectoría de la UANL y la necesidad de contar con un rector definitivo y no un interino como entonces lo hubo, sorprendió a propios y extraños al lanzarse como candidato "independiente" a la Rectoría, a pesar de conocer los mecanismos íntimos existentes al respecto, que llevaban a la Junta de Gobierno a siempre designar al indicado por el Gobernador del Estado. Lo irónico del asunto es que se vió obligado a utilizar parte de los argumentos de la vieja izquierda, que con tanto afán había combatido en sus buenos tiempos de poder, para justificar su pretensión sin contar con el aval del Gobernador del Estado.

El resultado final fue un gran golpe a su bien conocida megalomanía, pues fué muy poca o nula la respuesta que encontró entre los

alumnos y maestros, de tal manera que su aventura terminó en un auténtico fracaso que liquidó, incluso, los restos que quedaban del otrora poderoso grupo de la "Bata Blanca", cada uno de cuyos integrantes siguió su propio camino sin importarles mayormente lo que hacía o dejaba de hacer el socio exitoso de los viejos tiempos de gloria.

Lo único positivo que resultó de esta desafortunada incursión fué que poco después, a propuesta del Rector entonces designado, Dr. Reyes Tamez Guerra, el Consejo Universitario acordó un agregado al Estatuto General de la Universidad prohibiendo que un exrector o un exdirector de escuela o facultad, que ya hubiera cubierto dos períodos como tal, pudiera aspirar de nuevo a ser designado para esa función, propinando con ello un sensible golpe a la burocracia ya existente en los mandos medios de la Máxima Casa de Estudios del estado.

El rectorado del Ing. Gregorio Farías Longoria, que correspondió al sexenio del Lic. Jorge A. Treviño Martínez como Gobernador del Estado, no tuvo que enfrentar cuestionamientos desde la izquierda, la cual en la medida que existía en algunas escuelas como corriente moderada, llegó a ser respetada al momento de ganar las elecciones para director en varias de ellas. No fué el caso dentro de la estructura priísta construida en el seno de la Universidad, pues el Rector Farías tuvo que hacer frente a movimientos artificiales montados por funcionarios del propio Gobierno del Estado, interesados en recuperar posiciones de poder algunos y otros aspirando a "controlar" la institución dentro de sus planes políticos para el futuro inmediato. Los más importantes en este sentido fue la rebelión estallada en la Dirección de la Facultad de Leyes, por hombres allegados a Martínez Domínguez y la crisis provocada en el sindicato universitario —especialmente en la Sección del Hospital Universitario—, alentada desde la Secretaría General de Gobierno cuyo titular aspiraba a controlar ese islote de poder para utilizarlo posteriormente en sus aspiraciones al gobierno del estado.

Fuera de la Universidad el Partido Acción Nacional cuyo ascenso electoral ya era visible en los marcos de la nueva legislación determinada por la Reforma Política, empezó a convertir a la Máxima Casa de Estudios en uno de sus temas favoritos, aprovechando la circunstancia que sus